

Al Despacho del señor Juez, hoy veinticinco (25) de mayo de dos mil Veintitrés (2023), con atento informe que la anterior Acción de Tutela se recibió por Reparto.

La secretaria,

RUBIELA ORTIZ ORTIZ

**REPÚBLICA DE COLOMBIA**



**DISTRITO JUDICIAL DE SANTA ROSA DE VITERBO  
JUZGADO SEGUNDO PENAL DEL CIRCUITO  
CALLE 15 No. 10-08 OFICINA 205 PALACIO DE JUSTICIA SOGAMOSO  
J02PCTOSOGAMOSO@CENDOJ.RAMAJUDICIAL.GOV.CO  
7 70 28 14**

**TYBA No.:** 15759310900220230003000  
**NIJ2PCTOSOG:** 202300061.  
**ACCIONANTE:** YESICA DANIELA CAMARGO PARRA  
**ACCIONADA:** COMISIÓN NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL  
UNIVERSIDAD LIBRE. SECRETARIA DE EDUCACION Y O.  
**DERECHOS:** IGUALDAD, TRABAJO Y O.  
**DECISION:** AVOCA TUTELA

Sogamoso, Mayo Veinticinco (25) de Dos Mil Veintitrés (2023)

La señora YESICA DANIELA CAMARGO PARRA, persona mayor de edad y residente en esta localidad, interpone acción de tutela contra la COMISIÓN NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL, UNIVERSIDAD LIBRE, SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL CASANARE Y MINISTERIO DE EDUCACIÓN representadas legalmente por su Director o Gerente o quien haga sus veces, al considerar que se les está vulnerando los derechos fundamentales a la Igualdad, Trabajo, Derecho Al Acceso A La Carrera Administrativa, al no respetar el principio de honestidad al permitírsele presentar el examen sin haber revisado los requisitos mínimos para acceder al concurso ya que pese a cumplir con la totalidad de los requisitos exigidos por la OPEC fue excluida e inadmitida, del proceso de Selección No. 2150 a 2237 de 2021 y 2316 de 2022. Mediante Acuerdo número 2316 de 2022 Directivos Docentes, dado que se había inscrito para el cargo de DOCENTE DE ÁREA DE EDUCACIÓN ÉTICA Y VALORES, secretaria de Casanare No Rural OPEC No. 183622.

En relación con la medida provisional en sentencia T-103 de 2018 la Corte Constitucional indico:

*“...El Artículo 7 del Decreto 2591 de 1991 autoriza al juez constitucional para que adopte, a petición de parte o de oficio, “cualquier medida de conservación o seguridad”. La jurisprudencia de la Corte ha comprendido que la oportunidad que tiene el funcionario judicial para pronunciarse sobre la protección provisional va desde la presentación de la acción de tutela hasta antes de pronunciarse definitivamente en el fallo, “pues al resolver de fondo deberá decidir si tal medida provisional se convierte en permanente, esto es, definitiva o si, por el contrario, habrá de revocarse”. La protección provisional está dirigida a: i) proteger los derechos de los demandantes con el fin de impedir que un eventual amparo se torne ilusorio; ii) salvaguardar los derechos fundamentales que se encuentran en discusión o en amenaza de vulneración; y iii) evitar que se produzcan otros daños como consecuencia de los hechos objeto de análisis en el proceso, perjuicios que no se circunscriben a los que pueda sufrir el demandante. De ahí que, el juez está facultado para “ordenar lo que considere procedente” con arreglo a estos fines (inciso 2º del artículo transcrito). Las medidas provisionales cuentan con restricciones, debido a que la discrecionalidad que entraña su ejercicio no implica un poder arbitrario u omnímodo. Por ello, la expedición de esa protección cautelar debe ser “razonada, sopesada y proporcionada a la situación planteada...”*

Se solicita se decrete como medida provisional la suspensión de manera inmediata el cronograma del Proceso de Selección No. 2150 a 2237 de 2021, 2316, 2406 de 2022 Directivos Docentes y Docentes, Población Mayoritaria, zonas rural y no rural, en tanto se falla de fondo la presente acción de tutela.

En relación con la medida provisional solicitada por la Accionante, no se evidencia la urgencia de esta, una vez el despacho cuente con los elementos de juicio adoptará la decisión que en derecho corresponda.

Y, por ende, siendo éste el Despacho competente para conocer de esta acción conforme lo dispuesto en los decretos 1382 de 2000 art. 1 núm. 1 y 2591 de 1991 art. 37,

### **RESUELVE:**

1. Admitir la presente Acción de Tutela interpuesta por la señora YESICA DANIELA CAMARGO PARRA, persona mayor de edad y residente en esta localidad, interpone acción de tutela contra la COMISIÓN NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL, UNIVERSIDAD LIBRE, SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL CASANARE Y MINISTERIO DE EDUCACIÓN representadas legalmente por su Director o Gerente o quien haga sus veces al momento de la notificación de la presente acción de Tutela.
2. Téngase como pruebas las documentales allegadas por la parte accionante con su escrito.
3. Oficiése al Director o Gerente de COMISIÓN NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL, UNIVERSIDAD LIBRE, SECRETARIA DE EDUCACION DEL CASANARE Y

MINISTERIO DE EDUCACIÓN respectivamente o quien haga sus veces y désele traslado de la Acción constitucional y sus anexos para que en el término de dos (2) días para que hagan las manifestaciones respecto a los hechos y pretensiones enunciados en el escrito de tutela presentada por la señora YESICA DANIELA CAMARGO PARRA y, soliciten las pruebas que considere necesarias a la defensa de sus intereses.

4. Comunicar la presente decisión a todos los participantes del Proceso de Selección No. 2150 a 2237 de 2021, 2316, 2406 de 2022 Directivos Docentes y Docentes, Población Mayoritaria, zonas rural y no rural, para que, si lo desean, en el improrrogable termino dos días, contado a partir de la comunicación, se pronuncien sobre la acción instaurada y alleguen las pruebas que consideren pertinentes.
5. Para tal efecto, Requírase a la COMISION NACIONAL DELSERVICIO CIVIL y a la UNIVERSIDAD LIBRE para que den a conocer la existencia de esa acción constitucional con el envío de mensajes de datos a los correos electrónicos de los participantes del referido concurso y alleguen las constancias pertinentes.
6. En relación con la medida provisional solicitada por la accionante, una vez el despacho cuente con los elementos de juicio adoptará la decisión que en derecho corresponda.
7. Infórmese lo pertinente al señor DIRECTOR / GERENTE DE LA AGENCIA NACIONAL DE DEFENSA JURIDICA DEL ESTADO para que si a bien lo tiene se haga parte en la presente tutela.

**RADIQUESE, NOTIFIQUESE Y CUMPLASE**

**EL Juez,**



**RICARDO BENJAMÍN GRANADOS BECERRA**

RBGB/MGAG

Señor  
**JUEZ CONSTITUCIONAL (REPARTO)**  
E. S. D.

**Referencia: ACCIÓN DE TUTELA.**  
**Demandante: YESSICA DANIELA CAMARGO PARRA**  
**Demandado: UNIVERSIDAD LIBRE - NIT: 860013798-5 Y COMISIÓN NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL - CNSC - NIT: 900003409-7**

REFERENCIA: ACCIÓN DE TUTELA POR AMPARO AL DERECHO A LA VIDA (ART. 11, C.N.), DERECHO DE IGUALDAD (Art. 13, C.N.) Y A LA PROTECCIÓN AL TRABAJO (Art. 25, C.N.); POR CONEXIDAD A LA PRIMACÍA DE LOS DERECHOS INALIENABLES (Art. 5º, C.N.), DEBIDO PROCESO (Art. 29 C.N.), LA DIGNIDAD HUMANA (Art. 1º, C.N.), AL TRABAJO Y LA DIGNIDAD DEL TRABAJADOR (Art. 53, C.N.) Y PROTECCIÓN A LA FAMILIA COMO NÚCLEO FUNDAMENTAL DE LA SOCIEDAD (Art. 42, C.N.), ENTRE OTROS, ASÍ COMO LOS PRINCIPIOS DE LA CONFIANZA LEGÍTIMA, LA EQUIDAD, EDUCACIÓN DE CALIDAD, DEBIDO PROCESO ADMINISTRATIVO, MÉRITO Y LA BUENA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA.

**CAMARGO PARRA YESSICA DANIELA** identificado con cedula de ciudadanía no. [REDACTED] de **Sogamoso, (Boyacá)**, aspirante en la Convocatoria Territorial - Proceso de Selección No. 2150 a 2237 de 2021, 2316, 2406 de 2022 Directivos Docentes y Docentes, Población Mayoritaria, zonas rural y no rural, al cargo denominado **DOCENTE DE ÁREA DE EDUCACIÓN ÉTICA Y VALORES, secretaria de Casanare No Rural OPEC no. 183622** del proceso de selección 2150 A 2237 DE 2021, Domiciliado y residente en la ciudad de **Sogamoso, (Boyacá)**. Actuando en nombre propio ante su despacho, respetuosamente interpongo **ACCIÓN DE TUTELA** contra la **UNIVERSIDAD LIBRE** identificada con NIT: 860013798-5 y la **COMISIÓN NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL - CNSC NIT: 900003409-7**. Por la vulneración y transgresión de mis derechos fundamentales de: Igualdad (artículo 13 Constitución Nacional), al trabajo, acceso a la carrera administrativa por meritocracia (artículo 40 numeral 7 y artículo 125 Constitución Nacional) y Debido Proceso (artículo 29. Constitución Nacional).

## HECHOS

1. Inscripciones para el Proceso de Selección No. 2150 a 2237 de 2021 y 2316 de 2022 -Directivos Docentes y Docentes El 08 abril 2022, la Comisión Nacional del Servicio Civil - CNSC, informa a los interesados en participar en el Proceso de Selección No. 2150 a 2237 de 2021 y 2316 de 2022 Directivos Docentes y Docentes, que, a partir del 21 de abril de 2022, inicia la etapa de Adquisición de Derechos de Participación e Inscripciones a dicho proceso.  
Para lograr una inscripción exitosa tenga en cuenta la siguiente información:

## Cronograma

Actividad	Período de ejecución	Lugar o ubicación
Pago derechos de participación	PSE Línea Virtual del 21 de abril de 2022 al 11 de mayo de 2022.	Página web <a href="http://www.cnsc.gov.co">www.cnsc.gov.co</a> y/o enlace SIMO
Pago de los derechos de participación en el BANCO ITAÚ	Del 21 de abril de 2022 al 9 de mayo de 2022.	Página web <a href="http://www.cnsc.gov.co">www.cnsc.gov.co</a> y/o enlace SIMO Cualquier oficina del BANCO ITAÚ a nivel nacional
Inscripciones vía Web, plataforma SIMO	Del 21 de abril de 2022 al 11 de mayo de 2022.	Página web <a href="http://www.cnsc.gov.co">www.cnsc.gov.co</a> y/o enlace SIMO

Quienes estén interesados podrán inscribirse a través del aplicativo SIMO hasta el **próximo 9 de junio de 2022**.

Así en cumplimiento de lo establecido en el numeral 3 de los Acuerdos de los Procesos de Selección, la CNSC publicó un Instructivo, con el fin de orientar a los aspirantes en el cargue y validación de los documentos, el cual podrá ser consultado en el link <https://historico.cnsc.gov.co/index.php/2150-docentes-quias>

- La Comisión Nacional del Servicio Civil lanzó Oferta Pública de Empleos de Carrera – OPEC, para el Proceso de Selección No. 2150 a 2237 de 2021 y 2316 de 2022. Mediante Acuerdo número 2316 de 2022. Este proceso de selección buscaba proveer 13.729 vacantes en zona rural y 23.640 vacantes en zona no rural de las plantas de personal de las Entidades Certificadas en Educación para los empleos de Directivos Docentes (director Rural, Rector y Coordinador) y Docentes.
- Para poder participar en el Proceso de Selección No. 2150 a 2237 de 2021 y 2316 de 2022. Mediante Acuerdo número 2316 de 2022 Directivos Docentes (director Rural, Rector y Coordinador) y Docentes, consigne 50.000 por medio de PSE virtual con recepción a la Comisión Nacional del Servicio Civil, (CNCS), para adquirir el derecho de participación en el concurso.

NOTA: No es justo que me permitieran participar y presentarme al concurso para **DOCENTE DE ÁREA DE EDUCACIÓN ÉTICA Y VALORES, secretaria de Casanare No Rural OPEC no. 183622**, ya que no se respetó el principio de honestidad en tanto se me permitió presentar el examen sin haber revisado requisitos mínimos y se me vulneró mi derecho al trabajo, a condiciones equitativas y justas, (Artículo 25 de la constitución política de Colombia), ya que pese a cumplir completamente con los requisitos exigidos por la OPEC, fui excluida e INADMITIDA.

- Pantallazo requisitos para el cargo DOCENTE DE ÁREA DE EDUCACIÓN ÉTICA Y VALORES, secretaria de Casanare No Rural OPEC no. 183622.**

YESSICA DANIELA

PANEL DE CONTROL

Datos básicos

Formación

Experiencia

Produc. intelectual

Otros documentos

Oferta Pública de Empleos de Carrera (OPEC)

CONSIDERANDO LAS ESTRATEGIAS DIDACTICAS PROPIAS DE LA DISCIPLINA O AREA DE CONOCIMIENTO. 4. ORIENTAR LA REFLEXION Y APLICACIÓN PRÁCTICA DE LOS CONOCIMIENTOS PROPIOS DE LA DISCIPLINA O ÁREA DE CONOCIMIENTO, EN SITUACIONES DE AULA Y ESCENARIOS VINCULADOS A LAS EXPERIENCIAS COTIDIANAS DE LOS ESTUDIANTES. 5. PARTICIPAR DE ESPACIOS DE TRABAJO CONJUNTO CON DOCENTES DE OTRAS ÁREAS DE CONOCIMIENTO PARA ARTICULAR Y ENRIQUECER EL TRABAJO INTERDISCIPLINARIO.

**Requisitos**

📖 **Estudio:** LICENCIATURA EN EDUCACIÓN: LICENCIATURA EN ÉTICA (SOLO, CON OTRA OPCIÓN O CON ÉNFASIS) Ó, LICENCIATURA EN EDUCACIÓN INFANTIL CON ÉNFASIS EN EDUCACIÓN ÉTICA Y VALORES Ó, LICENCIATURA EN EDUCACIÓN BÁSICA CON ÉNFASIS EN VALORES HUMANOS Y EDUCACIÓN RELIGIOSA Ó, LICENCIATURA EN EDUCACIÓN CON ÉNFASIS EN HUMANIDADES Ó, LICENCIATURA EN FILOSOFÍA (SOLO, CON OTRA OPCIÓN O CON ÉNFASIS) Ó, LICENCIATURA EN CIENCIAS SOCIALES (SOLO, CON OTRA OPCIÓN O CON ÉNFASIS) Ó, LICENCIATURA EN HUMANIDADES (SOLO, CON OTRA OPCIÓN O CON ÉNFASIS) Ó, LICENCIATURA EN CIENCIAS O EDUCACIÓN RELIGIOSA (SOLO, CON OTRA OPCIÓN O CON ÉNFASIS) Ó, LICENCIATURA EN PSICOPELAGOGÍA (SOLO, CON OTRA OPCIÓN O CON ÉNFASIS) Ó, LICENCIATURA EN TEOLOGÍA (SOLO O CON OTRA OPCIÓN, CON ÉNFASIS)

📄 **Experiencia:** NO REQUIERE EXPERIENCIA

**Alternativas**

📖 **Estudio:** TÍTULO PROFESIONAL UNIVERSITARIO EN ALGUNO DE LOS SIGUIENTES PROGRAMAS: FILOSOFÍA Ó, TEOLOGÍA Ó, CIENCIAS RELIGIOSAS Ó, ESTUDIOS RELIGIOSOS

📄 **Experiencia:** NO REQUIERE EXPERIENCIA

**Equivalencias**

📄 [Ver aquí](#)

**Vacantes**

👤 **Dependencia:** DONDE SE UBIQUE EL CARGO, 🏠 **Municipio:** No\_Aplica, **Total vacantes:** 10

Activar Windows  
Ve a Configuración para activar Wi

4. Realicé mi inscripción el domingo 29 de Mayo de 2022 a las 12:50 PM, por consejo de mi suegra, quien es docente nombrada del área de Ciencias Sociales, de Villavicencio, ya que ella tiene una conocida que se había presentado a un concurso docente pasado sin haberse graduado, y posteriormente en el momento del cargue, validación y actualización de documentos pudo presentar su diploma de grado, y ejercer su derecho al trabajo, lo cual me motivo demasiado a presentarme en el concurso docente de 2022.
5. Conforme a lo establecido en el Acuerdo 2116 de 2021 de la CNSC, el concurso abierto de méritos. Proceso de Selección No. 2150 a 2237 de 2021, 2316, 2406 de 2022, para Directivos docentes y Docentes, Población Mayoritaria, se encuentra estructurado de la siguiente manera.
  - a) **Adopción del acto de convocatoria y divulgación.**
  - b) **Inscripción y publicación de admitidos a las pruebas.**
  - c) **Aplicación de la prueba de aptitudes y competencias básicas y la prueba psicotécnica.**
  - d) **Publicación de los resultados individuales de la prueba de aptitudes y competencias básicas, de la prueba psicotécnica y atención de las reclamaciones que presenten los aspirantes.**
  - e) **Recepción de documentos, publicación de verificación de requisitos y atención de las reclamaciones que presenten los aspirantes.**
  - f) Aplicación de las pruebas de valoración de antecedentes y entrevista a los aspirantes que cumplieron requisitos mínimos para el cargo.
  - g) Publicación de resultados de las pruebas de valoración de antecedentes y entrevista, y atención de las reclamaciones.
  - h) Consolidación de los resultados de las pruebas del concurso, publicación y aclaraciones.
  - i) Conformación y adopción de la lista de elegibles.

**NOTA:**

Las etapas resaltadas corresponde a las cuales la aspirante supero, y el punto **e)** fue la etapa en donde se vulneraron los derechos fundamentales, como; derecho de igualdad, la Dignidad Humana; derecho al Trabajo, y al Debido Proceso.

6. Dado que me encuentro en condición de **pobreza moderada**, lo cual se refleja en mi puntaje de **B5 en el SISBEN**, como **docente y joven de 23 años desempleada**, actualmente me enfrento a la falta de oportunidades laborales dignas. El mercado laboral, especialmente para los jóvenes adultos, es extremadamente exigente, y resulta aún más difícil conseguir un empleo acorde a mi formación académica en el sector privado, dado que no poseo experiencia. Incluso en trabajos informales, me ha resultado complicado asegurar mi sustento diario. Esta situación ha generado en mí un estado de depresión, ansiedad, estrés e incertidumbre, lo que me ha llevado a buscar ayuda a través de un proceso psicológico.

Ante esta situación, recorro al Señor Juez constitucional para implorar que se garanticen y amparen los derechos fundamentales, tales como el derecho a la igualdad, el debido proceso, el trabajo, al mérito, y la libertad de elección de profesión u oficio. Solicito que se tome en consideración la legislación colombiana

vigente, como la Constitución Política, la cual establece en sus artículos 13, 29 y 26, respectivamente, la protección de la igualdad de oportunidades, el derecho al debido proceso y la libertad de elección de profesión u oficio.

Es imperativo que se reconozca y se proteja mi derecho a acceder a una oportunidad laboral que sea acorde a mi perfil académico y que me permita tener un empleo digno, de acuerdo con lo establecido en el Decreto 1072 de 2015, por el cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo.

En función de lo planteado, pongo en consideración al respetado Señor Juez constitucional que se brinde el amparo necesario a mis derechos fundamentales, considerando la legislación vigente en Colombia, a fin de garantizar mi derecho fundamental al debido proceso, a la igualdad, al trabajo en condiciones dignas y justas, a la irrenunciabilidad de los beneficios mínimos consagrados en los artículos 13, 25, 29, 53, de la Constitución Política de Colombia.

7. La aspirante realizó una llamada informativa con la CNSC, (**Audio radicado 2023RS066883**), para preguntar si podría posteriormente en la etapa de cargue y actualización de documentos, subir el diploma de grado y que se lo tomaran en cuenta para ser admitida, sin embargo, a través de esta llamada es evidente como la CNSC y UNILIBRE nunca fue lo suficientemente clara y siempre dejaba vacíos en la información suministrada, a su vez, la aspirante también se contactó vía chat en línea con un funcionario, en donde le expongo las mismas dudas, mediante este chat afirma que si se podía actualizar los documentos aportados al inicio del proceso de selección, en este caso, el diploma de grado y acta de grado, sin embargo, a pesar de que la aspirante actualizo esos documentos **la CNSC y UNILIBRE no tuvo en cuenta la actualización de documentos**, y fue descalificada de manera abusiva y arbitraria del Concurso Por Méritos De La Secretaría De Educación Departamental De Casanare. (Proceso de Selección No. 2150 a 2237 de 2021, 2316, 2406 de 2022 Directivos Docentes y Docentes, Población Mayoritaria, zonas rural y no rural, la doctora Sandra Liliana Rojas Socha - Coordinadora General de Convocatoria - Directivos Docentes).

-Llamada probatoria de la aspirante **Yessica Daniela Camargo Parra** de las OPEC **183622** de la denominación **Docente de área educación ética y valores humanos** de la secretaría de educación del **departamento del Casanare- No Rural**.

#### **TRANSCRIPCIÓN AUDIO:**

**Funcionaria de la CNSC:** Comisión Nacional del servicio civil. Buenas tardes. Habla usted con Janet, ¿en qué le puedo colaborar?

**Aspirante:** ¿Buenas tardes, cómo estás?, Mira, es que tengo una preguntita.

**Funcionaria de la CNSC:** Claro que sí, usted me puede indicar su número de cédula para registro de la llamada.

**Aspirante:** Sí señora, 1057

**Funcionaria de la CNSC** sí, señora.

**Aspirante:** 610658

**Funcionaria de la CNSC:** ¿Y en qué municipio se encuentra?

**Aspirante:** En Sogamoso, Boyacá.

**Funcionaria de la CNSC:** ¿Muy bien, señorita Yessica, cuál es esa preguntita?

**Aspirante:** Sí, mira lo que pasa es que yo me presenté a la convocatoria docente, pero entonces yo que tenía la pregunta, ¿si hay la posibilidad de que pueda yo subir el diploma?

**Funcionaria de la CNSC:** Claro que sí, mire yo no sé para cuál la van a tomar, sí, para **verificación de requisitos mínimos** o valoración de antecedentes ahí en el en el anexo del acuerdo, en la página 18 están las instrucciones con respecto a eso, entonces **usted puede subir esa información y tenerla actualizada** ya, pero eso no quiere decir que no esté atenta a los avisos informativos de la página web, no del SIMO, sino de la página web en proceso de selección y desarrollo para cuando indiquen, en qué fechas se puede subir información o actualizar y actualizar los que ya lo tenías.

**Aspirante:** AHHH, es imagínate que yo me gradué ahorita en diciembre y recibo el diploma, entonces subí la culminación de terminación académica, pero entonces no sé si me valgan ahorita en diciembre subir el diploma de Pregrado

**Funcionaria de la CNSC:** no es, digamos, en ese momento yo creo que en estos días deben estar subiendo, solicitando eso. **O sea que usted suba lo que más se pueda ahí.** Y miremos a ver qué dice el proceso de selección porque eso lo tiene que verificar es en realidad la Universidad sí y el proceso de selección, verificar si invertir si usted está cumpliendo con los requisitos como lo piden o si esa información del título y **eso lo van a tener en cuenta en el momento de la postulación, no sabemos**, no sé cómo serán ellos que están manejando este proceso.

Entonces, sin embargo, usted suba lo que tenga, sin embargo digamos Sí, eso será en diciembre o más allá, diga usted cuando se graduó usted?

**Aspirante:** Pues me están diciendo que en diciembre o primeros de enero.

**Funcionaria de la CNSC:** Ah bueno ojalá.

**Aspirante:** Pase el concurso, imagínate entonces yo estoy a la espera de que me decían que si no tenía el diploma no haber subido la terminación estética, entonces en la fecha inscripción no alcance yo a subirlo, o sea yo ya termine académicamente antes de presentar el examen, cuando compre el pin para el concurso si no había terminado académicamente

**Funcionaria de la CNSC:** Entonces suba entonces eso a ver que le indican, si

**Aspirante:** Si, sí Dios quiere que tal haga una excepción, ¿cierto?

**Funcionaria de la CNSC:** Uno no sabe, uno no sabe cómo miren eso, eso sí, porque a veces se hace una lectura de los procedimientos y la entidad hace otra, entonces no saben si yo no me atrevo a asegurar niales mentir nada, entonces tuvo la información y esperemos a ver qué le dicen en los resultados y cuando sean los resultados se verifica, si cualquier resultado es negativo, verifique una por una la situación para ver si le están tomando eso o si se trata de otro documento. Mejor dicho, siempre hay que verificar muy bien.

**Aspirante:** Ah bueno listo perfecto, muchísimas gracias. Por aclarar mis dudas.

**Funcionaria de la CNSC:** Bueno, con el mayor de los gustos, que tengas buena tarde, muchos éxitos y la dejó con las encuestas para que califique, llamada hasta luego.

**NOTA:** Los funcionarios deben proporcionar información completa y verificada y asegurarse de que la información que brindan sea precisa, actualizada y verificada. Deben evitar la difusión de rumores o información no confirmada y basar sus declaraciones en datos y hechos comprobados, porque pueden crear falsas expectativas que afecte a los usuarios y sus derechos fundamentales.



8. En el literal 6 del ANEXO POR EL CUAL SE ESTABLECEN LAS CONDICIONES ESPECÍFICAS DE LAS DIFERENTES ETAPAS DEL PROCESO DE SELECCIÓN POR MÉRITO EN EL MARCO DE LOS PROCESOS DE SELECCIÓN NOS.2150 A 2237 DE 2021 Y 2316 DE 2022 – DIRECTIVOS DOCENTES Y DOCENTES: dice “luego de formalizada la inscripción, la misma no podrá ser anulada, ni se podrá cambiar el empleo para el cual se inscribió el aspirante.” Lo que sí se puede hacer es actualizar, modificar, reemplazar, adicionar o eliminar la información y/o los documentos registrados en el sistema para participar en el presente proceso de selección, únicamente hasta la fecha dispuesta por la CNSC para el cierre de la Etapa de inscripciones, siguiendo esta ruta en SIMO. **Panel de control → Mis empleos> confirmar empleo -> “Actualización de documentos” >**. El sistema generará una nueva constancia de inscripción con las actualizaciones realizadas. Frente a los documentos aportados se deben tener en cuenta dos momentos: **1. Para el cumplimiento de los requisitos mínimos**, únicamente se tendrán en cuenta los títulos y certificaciones de experiencia obtenidos y cargados en el aplicativo SIMO hasta el último día habilitado para la recepción de documentos. No obstante, se precisa que para el cumplimiento del requisito mínimo se toma como fecha válida de los títulos y/o experiencia, la obtenida hasta el último día hábil de la etapa de inscripción. **2. Para la prueba de valoración de antecedentes**, se tendrán en cuenta los certificados de formación y experiencia obtenidos y cargados en el aplicativo SIMO hasta el último día habilitado para la recepción de documentos.
9. En el numeral 2 del ANEXO POR EL CUAL SE ESTABLECEN LAS CONDICIONES ESPECÍFICAS DE LAS DIFERENTES ETAPAS DEL PROCESO DE SELECCIÓN POR MÉRITO EN EL MARCO DE LOS PROCESOS DE SELECCIÓN NOS.2150 A 2237 DE 2021 Y 2316 DE 2022 – DIRECTIVOS DOCENTES Y DOCENTES: Establece **PRUEBAS DE APTITUDES Y COMPETENCIAS BÁSICAS Y PRUEBA PSICOTÉCNICA**. Manifiesta que las pruebas de aptitudes y competencias básicas y la prueba psicotécnica tienen elementos cognitivos, actitudinales y procedimentales, que pueden ser evaluadas mediante pruebas y/o instrumentos adquiridos o contruidos para tal fin. **2.1. Prueba de aptitudes y competencias básicas:** Tiene por objeto valorar los niveles de conocimiento de la disciplina, habilidades, destrezas, aptitudes que demuestren los aspirantes del concurso público de méritos y estará orientada a la aplicación de saberes adquiridos para ejercer debidamente el cargo de Directivos Docentes y contendrá, como mínimo los siguientes componentes: 1. Lectura. 2. Razonamiento cuantitativo. 3. Valoración de competencias blandas como liderazgo, ética, trabajo en equipo y ciudadanía. 4. Conocimientos disciplinares de la formación requerida para el cargo, y las competencias pedagógicas para evaluar, formar y enseñar.
10. En el numeral 4 del ANEXO POR EL CUAL SE ESTABLECEN LAS CONDICIONES ESPECÍFICAS DE LAS DIFERENTES ETAPAS DEL PROCESO DE SELECCIÓN POR MÉRITO EN EL MARCO DE LOS PROCESOS DE SELECCIÓN NOS.2150 A 2237 DE 2021 Y 2316 DE 2022 – DIRECTIVOS DOCENTES Y DOCENTES: considera. **VERIFICACIÓN DE REQUISITOS MÍNIMOS:** El ICFES, la universidad o institución de educación superior contratada para el efecto por la CNSC realizará a los aspirantes que hayan superado la prueba de aptitudes y competencias básicas, la verificación del cumplimiento de los requisitos mínimos exigidos para el cargo que hayan seleccionado y que estén señalados en el Manual de Funciones, Requisitos y Competencias de que trata la Resolución No. 3842 del 18 de marzo de 2022 o la norma que la modifique, aclare o sustituya, expedida por el Ministerio de EDUCACIÓN Nacional con el fin de establecer si son o no admitidos para continuar en el concurso de méritos.

11. Los funcionarios de la COMISIÓN NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL han proporcionado información engañosa de manera repetida, desinformando intencionalmente a los aspirantes a concursos sobre la opción de inscribirse con certificados de terminación de materias. Esta conducta va en contra de las disposiciones legales que exigen a los funcionarios brindar información precisa y clara a los ciudadanos. Además, constituye una clara violación del principio constitucional de eficacia en la función administrativa. Los hechos descritos demuestran una conducta ilegal y falta de probidad por parte de los funcionarios de la COMISIÓN NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL. En efecto, se sugiere respetuosamente investigar y sancionar esta actuación irregular de acuerdo con las normas legales y los principios de probidad y transparencia que rigen la función pública en Colombia. En una de las llamadas registradas (**Audio radicado 2023RS066358, 2023REO80002**), se evidencia cómo un funcionario expresa explícitamente la posibilidad de actualizar la certificación de materias a través del Diploma de grado en la plataforma SIMO, durante la etapa de "cargue y actualización para la verificación de requisitos mínimos.
12. El 25 de septiembre de 2022 se realizó la aplicación de las pruebas escritas, el aspirante fue citado **al colegio Libertador en Sogamoso, Boyacá**, en tanto el cronograma previsto del concurso docente. Se presentó con su cédula de ciudadanía, lápiz, borrador, para el respectivo ingreso y desarrollo de la prueba de aptitudes y competencias básicas docentes, y prueba psicotécnica.
13. El 03 de noviembre de 2022 se publicaron los resultados de las pruebas escritas como resultado un puntaje de **prueba de aptitudes y competencias básicas docentes de aula; 74.69, sobre 100, y en la prueba psicotécnica; 75:00 sobre 100, con un resultado total entre las dos pruebas anteriores de; 56.04, continua en concurso estado admitido**, asimismo obtuve el puesto número 5 de los 19 aspirantes al empleo, **OPEC No. 183622**, donde se ofertaba diez plazas para el cargo de docente en **ética y valores humanos de la secretaría de Casanare, No\_ Rural**.  
**NOTA: El puntaje aprobatorio para aprobar el examen es de 60.**
14. Desde 10 al 16 de marzo de 2023 se llevó a cabo la etapa CARGUE Y VALIDACIÓN DE DOCUMENTOS, de acuerdo a la información suministrada por la funcionaria de la CNSC y el ANEXO POR EL CUAL SE ESTABLECEN LAS CONDICIONES ESPECÍFICAS DE LAS DIFERENTES ETAPAS DEL PROCESO DE SELECCIÓN POR MÉRITO EN EL MARCO DE LOS PROCESOS DE SELECCIÓN Nos. 2150 A 2237 DE 2021, 2316 y 2406 DE 2022 – DIRECTIVOS DOCENTES Y DOCENTES. Cargando los siguientes documentos a la plataforma SIMO:
  - A) Acta de Grado, (Licenciatura en Psicopedagogía con énfasis en asesoría educativa).
  - B) Diploma de grado Profesional. (Licenciatura en Psicopedagogía con énfasis en asesoría educativa).
15. Según los resultados de la etapa de verificación de requisitos mínimos se argumenta que el documento no es válido para el cumplimiento del requisito mínimo toda vez que la fecha del documento es posterior a la fecha de cierre de inscripción de la convocatoria.  
  
Según el anexo del concurso se establece que **“CARGUE Y VALIDACIÓN DE DOCUMENTOS PARA LA VERIFICACIÓN DE REQUISITOS MÍNIMOS Y VALORACIÓN DE ANTECEDENTES** La CNSC dará a conocer con al menos cinco (5) días calendario de antelación, la fecha para que los aspirantes que superaron

las pruebas con carácter eliminatorio dentro del proceso de selección, realicen el cargue y la actualización de los documentos registrados, para lo cual, SIMO mostrará todos los datos básicos y documentos de formación, experiencia y otros documentos que el aspirante tiene registrados en SIMO. El aspirante debe verificar que dicha información se encuentre correcta y actualizada para participar en el proceso de selección. El aspirante debe verificar que los documentos registrados en SIMO sean legibles, correspondan con los requisitos del empleo y que la información que suministra coincida con los documentos cargados” situación que realicé en el **martes 21 de Marzo de 2023 a las 18:58 PM**, al cargar mi diploma de grado, de **Licenciatura en Psicopedagogía con énfasis en asesoría educativa**, actuando bajo el principio constitucional de la buena fe.

16. Según el anexo del concurso se tiene que... “4.3. DOCUMENTACIÓN PARA LA VERIFICACIÓN DE REQUISITOS MÍNIMOS.... 2) Título(s) académico(s) o acta(s) de grado, **o certificación de terminación de materias** de la respectiva institución universitaria, conforme a los requisitos de estudio exigidos en el Proceso de Selección para ejercer el empleo al cual aspira, o la Tarjeta Profesional.” Según el manual de funciones **003842** de la OPEC no. **183622 Secretaría del Casanare**, del proceso de selección 2150 A 2237 DE 2021, los requisitos de estudio son:

Licenciatura en ética (solo, con otra opción o con énfasis). 2. Licenciatura en educación infantil con énfasis en educación ética y valores. 3. Licenciatura en educación básica con énfasis en valores humanos y educación religiosa. 4. Licenciatura en educación con énfasis en humanidades. 5. Licenciatura en filosofía (solo, con otra opción o con énfasis). 6. Licenciatura en ciencias sociales (solo, con otra opción o con énfasis). 7. Licenciatura en humanidades (solo, con otra opción o con énfasis). 8. Licenciatura en ciencias o educación religiosa (solo, con otra opción o con énfasis). **Licenciatura en psicopedagogía (solo, con otra opción o con énfasis)**. Licenciatura en teología (solo o con otra opción, con énfasis).

**Alternativas:** Título profesional universitario en alguno de los siguientes programas: Filosofía o tecnología o ciencias religiosas o estudios religiosos.

---

**Experiencia: NO REQUIERE EXPERIENCIA**

---

**NOTA:** Mi diploma de grado en Licenciatura en Psicopedagogía con énfasis en Asesoría Educativa, de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, Tunja, Boyacá, lo **SUBÍ Y CARGUÉ** plenamente en la **ETAPA DE CARGUE, ACTUALIZACIÓN Y VALIDACIÓN DE DOCUMENTOS PARA LA VERIFICACIÓN DE REQUISITOS MÍNIMOS Y VALORACIÓN DE ANTECEDENTES.**

## Pantallazo según el manual de funciones No. 003842

### 2.1.4.17 Docente en educación ética y valores humanos

Licenciatura en Educación.

1. Licenciatura en ética (solo, con otra opción o con énfasis).
2. Licenciatura en educación infantil con énfasis en educación ética y valores.
3. Licenciatura en educación básica con énfasis en valores humanos y educación religiosa.
4. Licenciatura en educación con énfasis en humanidades.
5. Licenciatura en filosofía (solo, con otra opción o con énfasis).
6. Licenciatura en ciencias sociales (solo, con otra opción o con énfasis).
7. Licenciatura en humanidades (solo, con otra opción o con énfasis).
8. Licenciatura en ciencias o educación religiosa (solo, con otra opción o con énfasis).
9. Licenciatura en psicopedagogía (solo, con otra opción o con énfasis).
10. Licenciatura en teología (solo o con otra opción, con énfasis).

Título profesional universitario en alguno de los siguientes programas:

1. Filosofía.
2. Teología.
3. Ciencias religiosas.
4. Estudios religiosos.

17. Para el 3 de marzo de 2023 la Universidad Libre publica la Guía de orientación al aspirante para cargue y/o actualización de documentos, Proceso de Selección No. 2150 a 2237 de 2021, 2316 y 2406 de 2022 - Directivos Docentes y Docentes, donde se menciona: "Respecto a la etapa de cargue y actualización de documentos, es necesario hacer referencia a las condiciones establecidas en el parágrafo 3 numeral 4 del anexo de los acuerdos, que señala: "(...) ...El ICFES o institución de educación superior contratada para el efecto por la CNSC, realizará la verificación de requisitos mínimos teniendo como fecha de corte, el último día hábil de las inscripciones prevista por la CNSC". Así mismo, el numeral 1.2.6 del anexo técnico de los acuerdos dispuso: "Para el cumplimiento de los requisitos mínimos, únicamente se tendrán en cuenta los títulos y certificaciones de experiencia obtenidos y cargados en el aplicativo SIMO hasta el último día habilitado para la recepción de documentos. No obstante, se precisa que para el cumplimiento del Requisito Mínimo se toma como fecha válida de los títulos y/o experiencia, la obtenida hasta el último día hábil de la etapa de inscripción a los acuerdos de los procesos de Selección en las tablas de puntuación, aclara que "se tendrá en cuenta todos los documentos cargados en el aplicativo SIMO hasta el último día habilitado para esto". La presente aclaración se emite 253 días después de la carga de documentos en la plataforma SIMO, y el pago de los derechos para participar en el concurso, el 24 de junio de 2022. Dicha aclaración se realiza previamente a la verificación de los requisitos mínimos el 29 de marzo de 2023, lo cual me excluye directamente del concurso. Esta omisión causa un perjuicio evidente en la participación, vulnerando el derecho al debido proceso.

18. SEGÚN LA RESOLUCIÓN **003842** 18 MAR 2022 Y LA OPEC no. **183622** **Secretaría del Casanare, No Rural**, del proceso de selección 2150 A 2237 DE 2021, no se especifica sobre los requisitos para la inscripción al concurso, solo hacen referencia de los requisitos al momento de posesionarse, los cuales cumplo **EN TOTALIDAD**, ante este vacío en la normatividad que regula el concurso, se dé una aplicación favorable para mi caso.

19. El 18 de abril de 2023, se publicaron las respuestas a las reclamaciones y los resultados definitivos de la etapa de Verificación de Requisitos Mínimos, comunicando la siguiente respuesta: "Con los anteriores argumentos fácticos y

legales, CONFIRMAMOS su estado de INADMITIDO dentro del proceso, motivo por el cual usted NO CONTINÚA en concurso, en cumplimiento de lo establecido en la Ley y el Acuerdo que rige el presente Proceso de Selección”. La respuesta a este Derecho de Petición, con Radicado de Entrada **No. 641267980** se estableció **INJUSTAMENTE** y de manera definitiva la exclusión, se dejó constancia de que no procede recurso alguno contra dicha decisión. Resulta imperativo identificar las falencias documentales, procedimentales, e informativas que tuvo la CNSC, desde la fase inicial del concurso hasta la etapa e) **Recepción de documentos, publicación de verificación de requisitos y atención de las reclamaciones que presenten los aspirantes,** en que se vulneran los derechos del sujeto demandante.

### **DERECHOS CUYA PROTECCIÓN SE DEMANDA**

Igualdad (artículo 13 constitucional Nacional), al trabajo, acceso a la carrera administrativa por meritocracia, (artículo 40 numeral 7 y artículo 125 Constitucional Nacional), Derecho al mérito, y al principio de buena fe en su núcleo esencial de la confianza legítima, derecho al acceso a cargos públicos, igualdad y debido proceso administrativo, (artículo 29. Constitución Nacional).

### **PETICIONES**

A merced de lo anteriormente expuesto, solicito amablemente al respetado Juez disponer y ordenar a favor de lo siguiente.

1. Con el fin de garantizar restablecer mis derechos fundamentales respetuosamente solicito señor juez constitucional ordenar a **la UNIVERSIDAD LIBRE** identificada con NIT: 860013798-5 y la **COMISIÓN NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL - CNSC** identificada con NIT: 900003409-7, mi admisión en la etapa de verificación de requisitos mínimos en el Proceso de Selección No. 2150 a 2237 de 2021, 2316, 2406 de 2022 Directivos Docentes y Docentes, Población Mayoritaria, zonas rural y no rural, al cargo denominado **DOCENTE DE ÁREA EDUCACIÓN ÉTICA Y VALORES HUMANOS**, OPEC no. **183622**, **Secretaría de Educación Departamental de Casanare.**
2. Ordenar a la Comisión Nacional del Servicio Civil –CNSC- y a la Universidad Libre de Colombia, en el término de cuarenta y ocho (48 hrs) horas, contado a partir de la notificación de la sentencia de tutela, ejerza su derecho de defensa y contradicción frente a hechos, derechos, fundamentos, argumentos y pretensiones en cada punto del escrito tutelar, aportando las pruebas que pretendan hacer valer en la actuación.
3. Ordenar a la COMISIÓN NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL - tener como válidos los certificados, diplomas, actas de grado y documentos aportados para acreditar el requisito mínimo de educación relacionada con el cargo **DOCENTE DE ÁREA EDUCACIÓN ÉTICA Y VALORES HUMANOS**, OPEC no. **183622**, **Secretaría de Educación Departamental de Casanare**, toda vez que cumplen con las exigencias de la OPEC publicadas inicialmente dentro del concurso de méritos para proveer el empleo en virtud de la prevalencia del derecho sustancial frente a lo formal, en tal virtud continuar con las diferentes etapas del proceso.
4. Se proteja de manera cierta, real, material y efectiva los derechos fundamentales de la señora Yessica Daniela Camargo Parra, aquí descritos y/o cualquier otro derecho

que el Honorable Juez Constitucional considere vulnerado por las entidades accionadas en la forma que el despacho estime pertinente y necesario.

### **MEDIDA PROVISIONAL**

1. Respetuosamente solicito señor juez constitucional, Suspender de manera inmediata el cronograma del Proceso de Selección No. 2150 a 2237 de 2021, 2316, 2406 de 2022 Directivos Docentes y Docentes, Población Mayoritaria, zonas rural y no rural, en tanto se falla de fondo la presente acción de tutela.
2. Se ordene a las Entidades Accionadas que, dentro de las 48 horas siguientes a la notificación de la Sentencia, la suspensión de las etapas restantes en los Procesos de Selección No. 2150 a 2237 de 2021, 2316 y 2406 de 2022 (Directivos Docentes y Docentes), convocados por el MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL, la COMISIÓN NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL – CNSC, la UNIVERSIDAD LIBRE y/o la SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, SECRETARÍA DEPARTAMENTAL DEL CASANARE, en definitiva, en la Oferta Pública de Empleos de Carrera – OPEC, a través del Sistema de Apoyo para la Igualdad, el Mérito y la Oportunidad – SIMO.

### **FUNDAMENTOS JURÍDICOS**

Se debe tener en cuenta que la CNSC, ha vulnerado siempre los derechos fundamentales ; motivo por el cual traemos a colación que mediante Auto Interlocutorio No 189 DEL JUZGADO 25 ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE MEDELLÍN, se ADMITIÓ la acción de tutela presentada por NANCY LUCIA PEREZ GONZALEZ en contra de la UNIVERSIDAD LIBRE DE COLOMBIA y la COMISIÓN NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL; ORDENAR a la CNSC publicar dentro de las 4 horas siguientes a que sea notificada, un aviso comunicando la admisión de la tutela y del escrito de tutela, en un link dentro de la página correspondiente específicamente a la convocatoria para Directivos Docentes y Docentes – Población Mayoritaria – 2150 a 2237 de 2021 y 2316 de 2022, tendiente a proveer el cargo de Rector no Rural, Numero OPEC 184235. Del cumplimiento de lo anterior, deberá allegarse prueba dentro de un término que no supere las 4 horas.

Se trae a colación otro caso de los miles que hay donde se vulneraron los derechos fundamentales de los participantes del Concurso Docente 2022. La Comisión Nacional del Servicio Civil informa que, el Tribunal Superior del Distrito Judicial Manizales Sala Civil-Familia, en el marco de la Acción de Tutela 202300056 interpuesta por AGUSTÍN CARDONA NARANJO, ordenó la comunicación de admisión de tutela a todos los participantes, del proceso de selección 2150 a 2237 de 2021, 2316 y 2406 de 2022 - Directivos Docentes y Docentes. En ese sentido, dando cumplimiento a la orden impartida, respetuosamente le informamos que puede hacer consulta del auto admisorio y del escrito de tutela ingresando al enlace.

La convocatoria es “la norma reguladora de todo concurso y obliga tanto a la administración, como a las entidades contratadas para la realización del concurso y a los participantes”, y como tal impone las reglas que son obligatorias para todos, entiéndase administración y administrados concursantes. Por tanto, como en ella se delinear los parámetros que guiarán el proceso, los participantes, en ejercicio de los principios de buena fe y confianza legítima, esperan su estricto cumplimiento. La Corte Constitucional ha considerado, entonces, que el Estado debe respetar y observar todas y cada una de las reglas y condiciones que se imponen en las convocatorias, porque su desconocimiento se convertiría en una trasgresión de principios axiales de nuestro ordenamiento constitucional,

entre otros, la transparencia, la publicidad, la imparcialidad, así como el respeto por las legítimas expectativas de los concursantes. En consecuencia, las normas de la convocatoria sirven de auto vinculación y autocontrol porque la administración debe “respetarlas y que su actividad, en cuanto a la selección de los aspirantes que califiquen para acceder al empleo o empleos correspondientes, se encuentra previamente regulada

Ahora bien, con respecto a los derechos fundamentales cuya protección ruego, me dispongo a rememorar lo considerado por la Corte Constitucional:

En sentencia C-034 de 29 de enero de 2014, con Ponencia de la Magistrada, doctora María Victoria Calle Correa, se consideró lo siguiente sobre el derecho fundamental al debido proceso: “Así entendido, en el ámbito de las actuaciones administrativas, el derecho al debido proceso hace referencia al comportamiento que deben observar las autoridades públicas en el ejercicio de sus funciones, en cuanto éstas se encuentran obligadas a “actuar conforme a los procedimientos previamente establecidos en la ley, con el fin de garantizar los derechos de quienes puedan resultar afectados por las decisiones de la administración que crean, modifican o extinguen un derecho o imponen una obligación o una sanción”|| 5.5. En el propósito de asegurar la defensa de los administrados, la jurisprudencia ha señalado que hacen parte de las garantías del debido proceso administrativo, entre otros, los derechos a:

- (i) ser oído durante toda la actuación,
- (ii)** (ii) a la notificación oportuna y de conformidad con la ley,
- (iii)** (iii) a que la actuación se surta sin dilaciones injustificadas, (iv) a que se permita la participación en la actuación desde su inicio hasta su culminación,
- (iv)** (v) a que la actuación se adelante por autoridad competente y con el pleno respeto de las formas propias previstas en el ordenamiento jurídico,
- (v)** (vi) a gozar de la presunción de inocencia,
- (vi)** (vii) al ejercicio del derecho de defensa y contradicción,
- (vii)** (viii) a solicitar, aportar y controvertir pruebas, y
- (viii)** (ix) a impugnar las decisiones y a promover la nulidad de aquellas obtenidas con violación del debido proceso

Adicionalmente, sobre este derecho también se ha considerado en sentencia C-1040 de 2007, reiterada en la C-878 de 2008, que: “[...] el principio de transparencia de la actividad administrativa se empaña si en contravía de las legítimas expectativas del aspirante, su posición en el concurso se modifica durante su desarrollo; el principio de publicidad (art. 209 C.P.) se afecta si las reglas y condiciones pactadas del concurso se modifican sin el consentimiento de quien desde el comienzo se sujetó a ellas; los principios de moralidad e imparcialidad (ídem) de la función administrativa se desvanecen por la inevitable sospecha de que un cambio sobreviniente en las reglas de juego no podría estar motivado más que en el interés de favorecer a uno de los concursantes; el principio de confianza legítima es violentado si el aspirante no puede descansar en la convicción de que la autoridad se acogerá a las reglas que ella misma se comprometió a respetar; se vulnera el principio de la buena fe (art. 83 C.P.) si la autoridad irrespeto el pacto que suscribió con el particular al diseñar las condiciones en que habría de calificarlo; el orden justo, fin constitutivo del Estado (art. 22 C.P.), se vulnera si la autoridad desconoce el código de comportamiento implícito en las condiciones de participación del concurso, y, en fin, distintos principios de raigambre constitucional como la igualdad, la dignidad humana, el trabajo, etc., se ven comprometidos cuando la autoridad competente transfórmalas condiciones y requisitos de participación y calificación de un concurso de estas características. Adicionalmente, el derecho que todo ciudadano tiene al acceso a cargos públicos, consagrado en el artículo 40 constitucional, se ve vulnerado si durante el trámite de un concurso abierto, en el que debe operar el principio de transparencia, se modifican las condiciones de acceso y evaluación...” Es claro

precisar entonces que, las reglas del concurso son INVARIABLES tal como lo reiteró esta Corporación en la sentencia SU-913 de 2009 al señalar "...resulta imperativo recordar la intangibilidad de las reglas que rigen las convocatorias de los concursos públicos para acceder a cargos de carrera en tanto no vulneren la ley, la Constitución y los derechos fundamentales en aras de garantizar el derecho fundamental a la igualdad, así como la inmodificabilidad de las listas de elegibles una vez éstas se encuentran en firme como garantía de los principios de buena fe y confianza legítima que deben acompañar estos proceso.

También invoco mis derechos fundamentales al trabajo y la igualdad de oportunidades, los cuales me han sido vulnerados en el proceso de selección que demandó, como también los principios contenidos en el artículo 53 de la Constitución Política, toda vez que por una arbitrariedad de los evaluadores del concurso, me están truncando mi proyecto de vida, mi oportunidad de mejorar, por medio del mérito, mis condiciones materiales y espirituales de existencia, me están negando la posibilidad de desarrollar mi potencial creativo y de servicio a la comunidad para lo que me he preparado con esfuerzo y tesón, no sólo desde el punto de vista académico.

## **1. PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE TUTELA EN CONCURSOS DE MÉRITOS.**

La acción de tutela se encuentra consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política y reglamentada en el Decreto 2591 de 1991. Es un mecanismo preferente y sumario para la protección inmediata de derechos fundamentales, ante la inexistencia de otros medios de defensa judicial, o ante la necesidad de evitar un perjuicio irremediable. Con fundamento en este marco normativo, la Corte Constitucional ha establecido que para la procedencia de la acción de tutela en este caso concreto debe analizarse:

- (i) si la persona respecto de la cual se predica la vulneración es titular de los derechos invocados –*legitimación por activa*–;
- (ii) si la presunta vulneración puede predicarse respecto de la entidad o persona accionada –*legitimación por pasiva*.
- (iii) si la tutela fue interpuesta en un término prudente y razonable después de ocurridos los hechos que motivan la afectación o amenaza de los derechos –*inmediatez*–
- (iv) si el presunto afectado dispone de otro medio de defensa judicial, salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar la ocurrencia de un perjuicio irremediable.

La Corte ha sostenido que, pese a la existencia de las vías de reclamación en lo contencioso administrativo, existen dos hipótesis que permiten la procedencia excepcional de la acción de tutela. La primera, se presenta cuando existe el riesgo de ocurrencia de un perjuicio irremediable, causal que tiene plena legitimación a partir del contenido mismo del artículo 86 del Texto Superior y, por virtud de la cual, se le ha reconocido su carácter de mecanismo subsidiario de defensa judicial. En este caso el perjuicio irremediable se daría con la continuidad del Proceso de Selección No. 2150 a 2237 de 2021, 2316, 2406 de 2022 Directivos Docentes y Docentes, Población Mayoritaria, zonas rural y no rural, afectando la legítima expectativa que se me ha generado según lo narrado el acápite de hechos. Y, la segunda, cuando el medio existente no brinda los elementos pertinentes de idoneidad y eficacia para resolver la controversia, a partir de la naturaleza de la disputa, de los hechos del caso y de su impacto respecto de derechos o garantías constitucionales.

La acción de tutela establecida por el constituyente de 1991, en el artículo 86 de la Carta Política, fue instituida con el firme propósito de garantizar a todas las personas que habitan



el territorio nacional, la efectividad en el ejercicio de sus derechos fundamentales cuando quiera que éstos resulten vulnerados o amenazados por la acción u omisión proveniente de una Autoridad Pública o de un particular en los casos determinados por la Ley. La Corte Constitucional en diversos pronunciamientos, entre otros el expresado en Sentencia T-052 de 2009, han admitido que:

“La acción de tutela en caso de vulneración a los derechos fundamentales del debido proceso, al trabajo, y de acceso a los cargos públicos, que se presenten en el trámite de un concurso, procede de manera excepcional para conjurar su conculcación. Con fundamento en la sentencia T-388 de 1998 de la Corte Constitucional, ha precisado que la acción de tutela procede para proteger los derechos fundamentales vulnerados con ocasión de los concursos de méritos adelantados para proveer empleos públicos” porque se ha considerado que las acciones contenciosas administrativas con las que cuentan los ciudadanos carecen de eficacia necesaria para conferir una protección integral y eficaz de los derechos de rango fundamental que puedan estar comprometidos”.

La Corte Constitucional ha señalado de manera recurrente que la acción de tutela es un mecanismo protector de derechos fundamentales de naturaleza residual y subsidiaria, por lo cual solo puede operar para la protección inmediata de los mismos cuando no se cuenta con otro mecanismo judicial de protección, o cuando existiendo este, se debe acudir a la tutela como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. Sin embargo, la doctrina constitucional ha reiterado que al estar en juego la protección de los derechos fundamentales al trabajo, la igualdad y el debido proceso de quienes participaron en un concurso de méritos y fueron debidamente seleccionados, la Corte Constitucional asume competencia plena y directa, aun existiendo otro mecanismo de defensa judicial, al considerar que la tutela puede “desplazar la respectiva instancia ordinaria para convertirse en la vía principal de trámite del asunto”, en aquellos casos en que el mecanismo alterno no es lo suficientemente idóneo y eficaz para la protección de estos derechos .

Según Jurisprudencia de la Corte Constitucional se tiene que en materia de concursos de méritos para la provisión de cargos de carrera se ha comprobado que no se encuentra solución efectiva ni oportuna acudiendo a un proceso ordinario o contencioso, en la medida que su trámite llevaría a extender en el tiempo de manera injustificada la vulneración de derechos fundamentales que requieren de protección inmediata. Esta Corte ha expresado, que, para excluir a la tutela en estos casos, el medio judicial debe ser eficaz y conducente, pues se trata nada menos que de la defensa y realización de derechos fundamentales, ya que no tendría objeto alguno enervar el mecanismo de tutela para sustituirlo por un instrumento previsto en el ordenamiento legal que no garantice la supremacía de la Constitución en el caso.

La Corte Constitucional mediante la sentencia de unificación SU - 613 de 2002, en la cual estableció:

“[...] existe una clara línea jurisprudencial según la cual la acción de tutela es el mecanismo idóneo para controvertir la negativa a proveer cargos de carrera en la administración judicial de conformidad con los resultados de los concursos de méritos, pues con ello se garantizan no sólo los derechos a la igualdad, al debido proceso y al trabajo, sino también el acceso a los cargos públicos, y se asegura la correcta aplicación del artículo 125 de la Constitución. Por lo mismo, al no existir motivos fundados para variar esa línea, la Sala considera que debe mantener su posición y proceder al análisis material del caso. Obrar en sentido contrario podría significar la violación a la igualdad del actor, quien a pesar de haber actuado de buena fe y según la jurisprudencia constitucional, ante un cambio repentino de ella

se vería incluso imposibilitado para acudir a los mecanismos ordinarios en defensa de sus derechos.”

**Prevalencia del derecho sustancial sobre las formas.** Artículo 228 de la Constitución Nacional. La Constitución Nacional en su artículo 228, dentro de los principios de la administración de justicia, consagra la prevalencia del derecho sustancial sobre el procesal, con la finalidad de garantizar que los funcionarios judiciales al aplicar las normas que regulan los procedimientos no obstaculicen la realización del derecho sustancial. Si bien las formalidades o ritos son parte de todo proceso judicial, dichas formas han sido establecidas para garantizar a las partes intervinientes el cumplimiento de un debido proceso que respete sus derechos. No obstante, al aplicarse de manera manifiesta, las normas atendiendo únicamente a su texto o haciendo una aplicación mecánica, se incurre en un exceso ritual manifiesto. Frente al alcance del artículo 228 superior, La Honorable Corte Constitucional ha señalado lo siguiente: “Teniendo en claro la prevalencia que en la administración de justicia debía tener el derecho sustancial, el constituyente de 1991 lo estableció como principio de la administración de justicia en el artículo 228 al consagrar que en las actuaciones de la administración de justicia “prevalecerá el derecho sustancial”. Esta corporación al establecer el alcance de la mencionada norma ha dicho: “Cuando el artículo 228 de la Constitución establece que en las actuaciones de la Administración de Justicia “prevalecerá el derecho sustancial”, está reconociendo que el fin de la actividad jurisdiccional, y del proceso, es la realización de los derechos consagrados en abstracto por el derecho objetivo, y, por consiguiente, la solución de los conflictos de intereses.

Es evidente que en relación con la realización de los derechos y la solución de los conflictos, el derecho procesal, y específicamente el proceso, es un medio.” En materia de tutela, en desarrollo del principio contemplado en el artículo 228 constitucional, se dijo que de manera excepcional podría el juez alejarse del procedimiento establecido con el fin de proteger el derecho sustancial: “La interpretación adecuada de la primacía anotada significa que los procedimientos legales adquieren su sentido pleno en la protección de los derechos de las personas. En consecuencia, cuando la aplicación de una norma procedimental pierde el sentido instrumental y finalista para el cual fue concebida y se convierte en una mera forma inocua o más grave aún. Contraproducente, el juez de tutela debe obviar el trámite formal en beneficio del derecho fundamental afectado. (...)”. (Sentencia T-283/94. M.P. Dr. Eduardo Cifuentes Muñoz).

Así las cosas, en aras de garantizar el respeto de los derechos fundamentales, y evitar la negación de los mismos, en los casos en que la observancia de las formalidades atente contra la protección del derecho fundamental quebrantado, éste debe prevalecer sobre las normas procesales. Con relación a la procedencia de la acción de tutela interpuesta como consecuencia de una irregularidad dentro de un concurso de méritos, La Corte ha sostenido que: “En lo que hace referencia a los concursos de méritos para acceder a cargos de carrera, en numerosos pronunciamientos la Corte ha reivindicado la pertinencia de la acción de tutela, a pesar de la presencia de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, por cuanto esta última no ofrece la suficiente solidez para proteger en toda su dimensión los derechos a la igualdad, al trabajo al debido proceso y de acceso a los cargos públicos.” (Sentencia T-514/05. M.P. Clara Inés Vargas Hernández).

La sala plena de la Honorable Corte Constitucional, recordó que la acción de tutela procede de manera excepcional para proteger los derechos fundamentales que resulten vulnerados con ocasión de expedición de actos administrativos en materia de concurso de méritos y, por tanto, sólo resulta procedente en dos supuestos (i) cuando el medio de defensa existe, pero en práctica es ineficaz para amparar el derecho fundamental, lo que se traduce en un claro perjuicio al actor; y (ii) cuando se ejerce la acción de tutela como mecanismo transitorio

para evitar un perjuicio irremediable. Para el presente caso se agotaron todos los procedimientos y recursos administrativos, expresando en la respuesta a reclamaciones que contra esta decisión no procede recurso alguno.

## **2. COMPETENCIA PARA TRAMITAR LA TUTELA**

Según lo previsto en el artículo 1 ° del DECRETO 1983 DE 2017 Numeral 2. Las acciones de tutela que se interpongan contra cualquier autoridad, organismo o entidad pública del orden nacional serán repartidas, para su conocimiento en primera instancia, a los Jueces del Circuito o con igual categoría. La acción de tutela establecida en el artículo 86° de la Constitución Política de Colombia procede como mecanismo de defensa y protección inmediata de los derechos fundamentales, únicamente cuando el afectado no dispone de otro medio de defensa judicial, salvo que, existiendo, se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. Está legitimada toda persona que considere amenazados o vulnerados sus derechos fundamentales por cualquier autoridad, para el presente caso el Proceso de Selección No. 2150 a 2237 de 2021, 2316, 2406 de 2022 Directivos Docentes y Docentes, Población Mayoritaria, zonas rural y no rural, la vulneración de mis derechos fundamentales se presenta en mi domicilio correspondiente a la jurisdicción de **(Sogamoso-Boyacá)**.

## **3. VULNERACIÓN DERECHOS FUNDAMENTALES**

El artículo 29 de la Constitución Política consagra el derecho fundamental al debido proceso, de conformidad con el cual “toda clase de actuaciones judiciales y administrativas” deben desarrollarse con respeto de las garantías inherentes al derecho fundamental del debido proceso. De conformidad con el texto constitucional, el debido proceso tiene un ámbito de aplicación que se extiende también a todas las actuaciones, procedimientos y procesos administrativos que aparejen consecuencias para los administrados. Al respecto, la Corte constitucional, en la Sentencia C-331 de 2012 indica como se ha desarrollado el derecho al debido proceso en el marco jurídico colombiano, expresando que se encuentra protegido por normas de derecho internacional, las cuáles cabe anotar, hacen parte del bloque de constitucionalidad<sup>1</sup> . De igual manera expresa que este derecho ha sido desarrollado por la jurisprudencia de órganos internacionales, tales como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la cual ha establecido que el principio del debido proceso se aplica también a los procedimientos de carácter civil y administrativo, jurisprudencia que el alto tribunal constitucional reconoce como una pauta hermenéutica relevante en el proceso de interpretación, aplicación y determinación del alcance de los derechos constitucionales<sup>7</sup> . La Corte Constitucional también se ha pronunciado acerca del contenido, elementos y características del derecho al debido proceso, el cual es considerado uno de los pilares fundamentales del Estado Social y constitucional de Derecho. Entre los elementos más importantes del debido proceso, se destacan: (i) la garantía de acceso libre y en igualdad de condiciones a la justicia, con el fin de lograr una pronta resolución judicial; (ii) la garantía de juez natural; (iii) las garantías inherentes a la legítima defensa; (iv) la determinación y aplicación de trámites y plazos razonables; (v) la garantía de imparcialidad; entre otras garantías.

En materia administrativa, la jurisprudencia constitucional establece que los principios generales que informan el derecho fundamental al debido proceso se aplican igualmente a todas las actuaciones administrativas que desarrolle la administración pública en el

---

<sup>1</sup> Se consagra en instrumentos tales como la Declaración Universal de Derechos Humanos – art. 10 y 11-, la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre – art. XVIII y XXVI-, El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP) –art.14 y 15-, y la Convención Americana sobre Derechos Humanos – art.8-

cumplimiento de sus funciones y realización de sus objetivos y fines, de manera que se garantice: (i) el acceso a procesos justos y adecuados; (ii) el principio de legalidad y las formas administrativas previamente establecidas; (iii) los principios de contradicción e imparcialidad; y (iv) los derechos fundamentales de los asociados. Todas estas garantías se encuentran encaminadas a garantizar el correcto y adecuado ejercicio de la función pública administrativa, de conformidad con los preceptos constitucionales, legales o reglamentarios vigentes y los derechos de los ciudadanos, con el fin de evitar posibles actuaciones abusivas o arbitrarias por parte de la administración a través de la expedición de actos administrativos que resulten lesivos de derechos o contrarios a los principios del Estado de Derecho.

Igualmente, el alto tribunal estima que estas garantías inherentes al debido proceso administrativo constituyen un contrapeso al poder del Estado en las actuaciones que desarrolle frente a los particulares. También se ha especificado por parte de la Corte Constitucional, que la aplicación del principio del debido proceso administrativo, se derivan consecuencias importantes, tanto para los asociados, como para la administración pública. Desde la perspectiva de los asociados, de este derecho se desprenden las garantías de (i) conocer las actuaciones de la administración; (ii) pedir y controvertir las pruebas; (iii) ejercer con plenitud su derecho de defensa; (iv) impugnar los actos administrativos, y (v) gozar de las demás garantías establecidas en su beneficio. Al respecto manifiesta que todas las manifestaciones del ejercicio de la función pública administrativa se encuentran cobijadas por el debido proceso, tales como (i) la formación y ejecución de actos administrativos; (ii) las peticiones presentadas por los particulares; y (iii) los procesos que se adelanten contra la administración por los ciudadanos en ejercicio legítimo de su derecho de defensa.<sup>2</sup> De igual manera, la Corte también expresa que el principio del debido proceso administrativo cobra una especial relevancia constitucional cuando se trata del desarrollo de la facultad sancionadora de la administración pública. De esta manera, cuando la Carta consagra el debido proceso administrativo, reconoce implícitamente la facultad que corresponde a la Administración para imponer sanciones. En punto a este tema, la jurisprudencia constitucional indica que la potestad sancionadora de la Administración persigue: (i) la realización de los principios constitucionales que gobiernan la función pública, de conformidad con el artículo 209 de la Carta, esto es, igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad; (ii) se diferencia de la potestad sancionadora por la vía judicial; (iii) se encuentra sujeta al control judicial; y (iv) debe cumplir con las garantías mínimas del debido proceso<sup>3</sup> En relación con las garantías que se derivan del carácter fundamental del debido proceso, el órgano de cierre constitucional señala en la sentencia T-455 de 2005, que de este derecho como prerrogativa fundamental se desprenden las siguientes garantías: "...i) la necesidad que la actuación administrativa se surta sin dilaciones injustificadas, ii) de conformidad con el procedimiento previamente definido en las normas, iii) ante la autoridad competente; iv) con pleno respeto de las formas propias de la actuación administrativa previstas en el ordenamiento jurídico; v) en acatamiento del principio de presunción de inocencia; vi) de garantía efectiva de los derechos a ser oídos, a disponer de todas las posibilidades de oposición y defensa en la actuación administrativa, a impugnar las decisiones que contra ellos se profieran, a presentar y a controvertir las pruebas y a solicitar la nulidad de aquellas obtenidas con violación del debido proceso." De este apartado de la providencia en cita se deducen tres conclusiones: 1) Que el procedimiento administrativo debe responder al principio de legalidad y estar establecido en las normas; 2) Que deben respetarse con aplicación estricta de las formas de actuación previstas en la normatividad, y 3) que se debe garantizar el derecho a la defensa en todas sus formas.

---

<sup>2</sup> Ver sentencias T-391 de 1997 y T-196 de 2003, entre otras.

<sup>3</sup> Ver sentencia C-506 de 2002, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra.

Según acervo probatorio aportado en la presente , se le da al Juez de Tutela, el marco jurídico suficiente y apropiado para que este concurso de méritos, pueda ser revisado y modificado según las evidencias expuestas y confrontadas con las referencias técnicas ofrecidas por la CNSC como corresponde al respeto del debido proceso invocado reiterativamente en la exposición de motivos.

El derecho al debido proceso administrativo en los concursos de méritos Dentro de ese contexto, la Corte Constitucional ha definido el debido proceso administrativo como, “(i) el conjunto complejo de condiciones que le impone la ley a la administración, materializado en el cumplimiento de una secuencia de actos por parte de la autoridad administrativa, (ii) que guarda relación directa o indirecta entre sí, y (iii) cuyo fin está previamente determinado de manera constitucional y legal”.

Lo anterior, con el objeto de “(i) asegurar el ordenado funcionamiento de la administración, (ii) la validez de sus propias actuaciones y, (iii) resguardar el derecho a la seguridad jurídica y a la defensa de los administrados” En cuanto a esta prerrogativa la Corte Constitucional en sentencia T-425 de 2019, expuso: “La jurisprudencia constitucional ha señalado que el respeto al debido proceso involucra “los derechos de defensa, contradicción y controversia probatoria, el derecho de impugnación, y la garantía de publicidad de los actos de la Administración”. **Esto significa el deber de la entidad administradora del concurso de (i) fijar de manera precisa y concreta las condiciones, pautas y procedimientos del concurso, (ii) presentar un cronograma definido para los aspirantes, (iii) desarrollar el concurso con estricta sujeción a las normas que lo rigen y, en especial, a las que se fijan en la convocatoria, (iv) garantizar “la transparencia del concurso y la igualdad entre los participantes”, (v) asegurar que “los participantes y otras personas que eventualmente puedan tener un interés en sus resultados, tienen derecho a ejercer control sobre la forma como se ha desarrollado” y (vi) no someter a los participantes a una espera indefinida y con dilaciones injustificadas.**

Según la Resolución 003842 del 18 de marzo de 2022 y la OPEC no. **183622** del proceso de selección 2150 a 2237 de 2021, no se establecen requisitos específicos sobre la fecha de emisión de los documentos para la inscripción al concurso. Solo hacen referencia de los requisitos al momento de posesionarse, los cuales cumpla cabalmente, ante este vacío en la normatividad que regula el concurso, se debe aplicar el principio de favorabilidad en la etapa de verificación de requisitos mínimos.

Según el anexo del concurso se tiene que... “4.3. DOCUMENTACIÓN PARA LA VERIFICACIÓN DE REQUISITOS MÍNIMOS.... 2) Título(s) académico(s) o acta(s) de grado, **o certificación de terminación de materias** de la respectiva institución universitaria, conforme a los requisitos de estudio exigidos en el Proceso de Selección para ejercer el empleo al cual aspira, o la Tarjeta Profesional.” Según el manual de funciones de la OPEC no. **183622** del proceso de selección 2150 A 2237 DE 2021, los requisitos de estudio son: “LICENCIATURA EN CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN: LICENCIATURA EN **PSICOPEDAGOGÍA CON ÉNFASIS EN ASESORÍA EDUCATIVA**” título que fue **aprobado plenamente en la etapa de CARGUE, ACTUALIZACIÓN Y VALIDACIÓN DE DOCUMENTOS PARA LA VERIFICACIÓN DE REQUISITOS MÍNIMOS Y VALORACIÓN DE ANTECEDENTES.**

---

**NOTA:** Mi diploma de grado en Licenciatura en Psicopedagogía con énfasis en Asesoría Educativa, de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, Tunja, Boyacá, lo **SUBÍ Y CARGUÉ** plenamente en la **ETAPA DE CARGUE, ACTUALIZACIÓN Y VALIDACIÓN DE DOCUMENTOS PARA LA VERIFICACIÓN DE REQUISITOS MÍNIMOS Y VALORACIÓN DE ANTECEDENTES A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA SIMO.**

Continuación de la Resolución "Por la cual se adopta el nuevo Manual de Funciones, Requisitos y Competencias para los cargos de Directivos Docentes y Docentes del Sistema Especial de Carrera Docente y se dictan otras disposiciones".

5. Deportología.
6. Educación Física.
7. Entrenamiento deportivo o administración deportiva.

#### **2.1.4.17 Docente en educación ética y valores humanos**

Licenciatura en Educación.

1. Licenciatura en ética (solo, con otra opción o con énfasis).
2. Licenciatura en educación infantil con énfasis en educación ética y valores.
3. Licenciatura en educación básica con énfasis en valores humanos y educación religiosa.
4. Licenciatura en educación con énfasis en humanidades.
5. Licenciatura en filosofía (solo, con otra opción o con énfasis).
6. Licenciatura en ciencias sociales (solo, con otra opción o con énfasis).
7. Licenciatura en humanidades (solo, con otra opción o con énfasis).
8. Licenciatura en ciencias o educación religiosa (solo, con otra opción o con énfasis).
9. Licenciatura en psicopedagogía (solo, con otra opción o con énfasis).
10. Licenciatura en teología (solo o con otra opción, con énfasis).

#### **2.1.4.17 Docente en educación ética y valores humanos**

Licenciatura en Educación.

1. Licenciatura en ética (solo, con otra opción o con énfasis).
2. Licenciatura en educación infantil con énfasis en educación ética y valores.
3. Licenciatura en educación básica con énfasis en valores humanos y educación religiosa.
4. Licenciatura en educación con énfasis en humanidades.
5. Licenciatura en filosofía (solo, con otra opción o con énfasis).
6. Licenciatura en ciencias sociales (solo, con otra opción o con énfasis).
7. Licenciatura en humanidades (solo, con otra opción o con énfasis).
8. Licenciatura en ciencias o educación religiosa (solo, con otra opción o con énfasis).
9. Licenciatura en psicopedagogía (solo, con otra opción o con énfasis).
10. Licenciatura en teología (solo o con otra opción, con énfasis).

Título profesional universitario en alguno de los siguientes programas:

1. Filosofía.
2. Teología.
3. Ciencias religiosas.
4. Estudios religiosos.

## **CONJUNCIONES "O" E "Y" EN MATERIA JURÍDICA**

Él Diccionario de la Lengua Española publicado por la Real Academia Española en su vigésima edición correspondiente a 1984 nos precisa los siguientes conceptos:

O: Conjunción disyuntiva que denota diferencia, separación o alternativa entre dos o más personas, cosas o ideas.

Y: Conjunción copulativa cuyo oficio es unir palabras o cláusulas en concepto afirmativo. Ambas conjunciones sirven no solamente para denotar el enlace entre dos o más palabras u oraciones, sino también la naturaleza de dicho enlace.

La disyuntiva "o" desune o separa el entendimiento. Si bien gramaticalmente une las palabras o las oraciones, resalta la oposición del juicio, sirva para expresar juicios

contradictorios, en el presente caso se tiene como según el anexo del concurso... “4.3. DOCUMENTACIÓN PARA LA VERIFICACIÓN DE REQUISITOS MÍNIMOS.... 2) Título(s) académico(s) o acta(s) de grado, **o certificación de terminación de materias** de la respectiva institución universitaria” como se presentó dentro de las fechas establecidas.

La decisión de inadmitirme del proceso de selección, va en contra de la interpretación taxativa del numeral 4.3 del anexo del concurso, que no menciona ninguna limitación o distinción en cuanto al uso de la certificación de terminación de materias. Ha presentado la certificación de terminación de materias, la cual cumple con los requisitos establecidos en el proceso de selección. No se menciona en ningún lugar del anexo que la certificación de terminación de materias sólo sea válida para la experiencia y no para el cumplimiento de requisitos mínimos. Por lo tanto, la documentación presentada cumple con lo requerido. En relación con los dos momentos de presentación de documentos: El anexo establece que se tendrán en cuenta los títulos y certificaciones de experiencia obtenidos y cargados en el aplicativo SIMO hasta el último día hábil de la etapa de inscripción.

En este caso, se ha cumplido con este requisito y se ha cargado todos los documentos necesarios dentro del plazo establecido. Por lo tanto, no existe motivo para inadmitirme del concurso de méritos. Sobre las funciones específicas de los docentes de área de conocimiento: El anexo menciona las funciones específicas que deben desempeñar los docentes en el cargo al que aspira. Sin embargo, estas funciones no son mencionadas como requisitos excluyentes para participar en el concurso. El cumplimiento de estas funciones se evaluará posteriormente en la etapa de valoración de antecedentes. Por lo tanto, no es justificable excluirlo del proceso por no haber cumplido aún con estas funciones, ya que no se trata de requisitos mínimos para participar en el concurso. En cuanto a los requisitos de ser licenciado graduado: Según el anexo, se establece que se debe ser licenciado graduado al momento de inscribirse al concurso. En este caso, cumple con este requisito, ya que he culminado satisfactoriamente mis estudios y he obtenido el certificado de terminación de materias.

La Corte Constitucional ha establecido los parámetros del Derecho al Debido Proceso Administrativo, resaltando que es un derecho fundamental de rango constitucional que abarca todas las garantías mínimas contempladas en el Artículo 29 de la Constitución. Este derecho se aplica en todas las etapas de la actuación administrativa, desde antes de la expedición del Acto Administrativo hasta las etapas de comunicación e impugnación de la decisión. Además, debe tenerse en cuenta los principios que rigen la función pública, como la eficacia, igualdad, moralidad, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad.

En este contexto, el accionante vincula los hechos con los principios del Debido Proceso Administrativo, desarrollados en el Artículo 3 del CPACA, y los principios señalados en el Artículo 209 de la Constitución Nacional que orientan la función pública, especialmente los principios de buena fe y transparencia. Estos principios han sido vulnerados por las entidades demandadas al no admitir al accionante en la etapa de verificación de requisitos mínimos, a pesar de que un funcionario de la CNSC proporcionó información engañosa para inscribirse en un concurso de méritos. Esta conducta generó en el accionante una expectativa basada en la buena fe y una confianza legítima. El principio de buena fe se entiende como la honestidad, confianza, rectitud y credibilidad que debe acompañar a las palabras comprometidas. Su objetivo es evitar actuaciones arbitrarias por parte de las autoridades públicas y brindar estabilidad al orden jurídico. La buena fe busca que las actuaciones del Estado y de los particulares sean predecibles y no se basen en caprichos arbitrarios. En este caso, el principio de buena fe se aplica a la información brindada por los funcionarios de la CNSC durante la llamada telefónica. De la buena fe se deriva el principio de confianza legítima, que implica que la Administración debe abstenerse de modificar situaciones jurídicas originadas en actuaciones previas que generan expectativas justificadas en los ciudadanos. Este principio limita las acciones de las autoridades y busca

mantener la estabilidad y seguridad jurídica. En base a esta información, el accionante tiene una expectativa legítima debido a que cumple con los requisitos necesarios para participar en el proceso de selección. En conclusión, el principio de confianza legítima funciona como una restricción a las acciones de las autoridades y busca proteger la estabilidad y seguridad jurídica. La confianza que los ciudadanos depositan en los entes estatales debe ser respetada y protegida por el juez constitucional.

**EXCESO RITUAL MANIFIESTO.** Sentencia 00537 de 2018 Consejo de Estado. La Corte Constitucional ha definido el defecto procedimental por exceso ritual manifiesto como aquel que se presenta cuando “un funcionario utiliza o concibe los procedimientos como un obstáculo para la eficacia del derecho sustancial y por esta vía, sus actuaciones devienen en una denegación de justicia. (Sentencia T-024 del 17 de enero de 2017). Prevalencia del derecho sustancial frente a lo formal Por su parte, el artículo 228 de la Constitución Política consagra el principio de prevalencia del derecho sustancial sobre el formal, que propende porque las normas procesales sean el medio que permita concretar o efectivizar los derechos sustanciales de los ciudadanos.

**La verificación de requisitos mínimos debería llevarse a cabo al inicio del concurso, para evitar generar falsas expectativas en los concursantes, prevenir situaciones de estrés y ansiedad prolongada, proteger los derechos de los participantes y asegurar un proceso más transparente y equitativo.** Se considera que esta medida contribuiría significativamente a mejorar la experiencia de los concursantes y a fortalecer la integridad de los concursos públicos en general. Es relevante subrayar que la verificación de requisitos mínimos, tal como se establece en el proceso de selección, no constituye una prueba ni un instrumento de selección, sino una condición obligatoria de orden constitucional y legal. En este sentido, es fundamental que los requisitos sean claros, específicos y estén debidamente establecidos en el marco normativo aplicable. Sin embargo, en el presente caso, el anexo técnico del concurso no hace referencia explícita a la exclusión de los aspirantes que presenten certificados de terminación de materias.

El artículo 31 de la Ley 909 de 2004 dispone que los procesos de selección o los concursos se componen por las siguientes etapas:

***1. Convocatoria.** La convocatoria, que deberá ser suscrita por la Comisión Nacional del Servicio Civil, el Jefe de la entidad u organismo, es norma reguladora de todo concurso y obliga tanto a la administración, como a las entidades contratadas para la realización del concurso y a los participantes.*

***2. Reclutamiento.** Esta etapa tiene como objetivo atraer e inscribir el mayor número de aspirantes que reúnan los requisitos para el desempeño de los empleos objeto del concurso.*

***3. Pruebas.** Las pruebas o instrumentos de selección tienen como finalidad apreciar la capacidad, idoneidad y adecuación de los aspirantes a los diferentes empleos que se convoquen, así como establecer una clasificación de los candidatos respecto a las calidades requeridas para desempeñar con efectividad las funciones de un empleo o cuadro funcional de empleos. // La valoración de estos factores se efectuará a través de medios técnicos, los cuales deben responder a criterios de objetividad e imparcialidad. // Las pruebas aplicadas o a utilizarse en los procesos de selección tienen carácter reservado, solo serán de conocimiento de las personas que indique la Comisión Nacional del Servicio Civil en desarrollo de los procesos de reclamación.*



**4.** *Con los resultados de las pruebas la Comisión Nacional del Servicio Civil o la entidad contratada por delegación de aquella elaborará en estricto orden de mérito la **lista de elegibles** que tendrá una vigencia de dos (2) años. Con esta y en estricto orden de méritos se cubrirán las vacantes para las cuales se efectuó el concurso y las vacantes definitivas de cargos equivalentes no convocados, que surjan con posterioridad a la convocatoria de concurso en la misma Entidad.*

**5. Período de prueba.** *La persona no inscrita en carrera administrativa que haya sido seleccionada por concurso será nombrada en período de prueba, por el término de seis (6) meses, al final de los cuales le será evaluado el desempeño, de acuerdo con lo previsto en el reglamento.// Aprobado dicho período al obtener evaluación satisfactoria el empleado adquiere los derechos de la carrera, los que deberán ser declarados mediante la inscripción en el Registro Público de la Carrera Administrativa. De no obtener calificación satisfactoria del período de prueba, el nombramiento del empleado será declarado insubsistente.*

Cuando se anuncia un concurso público, los participantes dedican tiempo, energía y recursos para prepararse adecuadamente. Se comprometen emocional y mentalmente, tomando decisiones que pueden impactar su bienestar laboral y personal. En muchos casos, los concursantes se encuentran en situaciones de precariedad laboral o en busca activa de empleo, por lo que obtener un puesto en el concurso es crucial para su estabilidad económica y profesional. Sin embargo, cuando la verificación de requisitos mínimos se lleva a cabo meses después del inicio del concurso, se genera una incertidumbre prolongada y una espera angustiante para los participantes. Esta situación puede afectar negativamente su salud mental y emocional, aumentando los niveles de estrés y ansiedad. Además, durante este período de espera, los concursantes se encuentran en una posición vulnerable, sin empleo seguro y sin la posibilidad de planificar su futuro de manera adecuada.

Realizar la verificación de requisitos mínimos al comienzo del concurso permitiría determinar de manera clara quiénes cumplen con los criterios establecidos y quiénes no. Esto evitaría generar expectativas falsas y brindaría a los participantes la oportunidad de evaluar su elegibilidad antes de invertir tiempo y recursos en el proceso. Esta práctica no solo aseguraría un trato más justo y equitativo, sino que también ayudaría a prevenir situaciones en las que los concursantes se vean perjudicados en términos de salud y empleo debido a la larga espera de una respuesta negativa.

## COMPETENCIA

Es usted, Señor Juez Constitucional competente en Primera Instancia para conocer del asunto, por la naturaleza de los hechos, por tener jurisdicción en el domicilio del accionante y conformidad en el Decreto 1382 de 2000 y el Artículo 1º del Decreto 1983 del 2017.

## JURAMENTO

Como accionante manifiesto bajo la gravedad de juramento que **no he interpuesto otra Acción de Tutela** con las mismas pretensiones por causa de los hechos aquí relacionados. Señor Juez Constitucional, en el caso bajo estudio se acreditan los requisitos de legitimación en la causa por activa y pasiva, inmediatez y subsidiariedad. Por lo anterior, la acción de tutela interpuesta por el suscrito es procedente.

## PRUEBAS

- Ruego al Honorable Juez Constitucional tener como pruebas las siguientes.

1. Copia de la Cedula de Ciudadanía
2. Certificado de terminación de materias expedido por la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia.
3. Copia del acta de Grado expedida por la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia.
4. Diploma expedido por la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia.
5. Pantallazo SISBEN
6. Pantallazo de OPEC Postulación.
7. Pantallazo de reporte de inscripción.
8. Pantallazo de las Pruebas de Conocimientos Específicos y Pedagógicos y Prueba Psicotécnica.
9. Pantallazo de Reporte de Inscripción y de Actualización en el SIMO.
10. Anexo Técnico proceso de selección 2150 A 2237 DE 2021, 2316 y 2406 DE 2022 - DIRECTIVOS DOCENTES Y DOCENTES
11. Respuesta Derecho de Petición etapa de reclamaciones, con Radicado de Entrada No. 641267980.
12. RESPUESTAS RADICADO NO 2023RS066883 (Llamada telefónica) e imágenes de conversación vía chat virtual.
13. RESPUESTA RADICADO NO 2023RE080002
14. RESPUESTA RADICADO NO 2023RS066358 2023RE080002
15. TRANSCRIPCIÓN DE LAS LLAMADAS de los participantes al concurso Jimmy Andrés Castelblanco Rodríguez y Fabián Danilo Valencia Herrera de las OPEC 182901 y 185034 del territorio Cauca y Boyacá con fechas de Junio, Noviembre, diciembre de 2022.